



## INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “ACOMPAÑAMIENTO, APOYO AUXILIAR Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2 LOTES)”

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

### A) SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AUXILIAR.

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 63 como modalidad de atención a los menores guardados por la Entidad Pública, la de acogimiento residencial.

A su vez, en su artículo 66, establece que los menores residentes tendrán *“cubiertas suficientemente las necesidades fundamentales de su vida cotidiana que le permitan el adecuado desarrollo personal”*, así como derecho a *“acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad (...)”*.

Las Residencias Infantiles de la Red de Protección de la Comunidad de Madrid acogen a menores que ingresan en el sistema de protección con una medida (Tutela o Guarda) acordada por la Comisión de Tutela del Menor.

En los últimos años se está atendiendo a un número muy elevado de menores con patologías médicas graves y severas, discapacidades físicas/motoras (movilidad reducida), necesitando para su desplazamiento silla de ruedas así como menores con discapacidad psíquica muy grave, que requieren una supervisión y atención continua.

En concreto, estos menores presentan las siguientes características:

- Menores que, conservando plenamente sus capacidades cognitivas, padecen patologías médicas severas, expresadas en términos de graves discapacidades físicas y motoras, que reducen significativamente sus posibilidades de movilidad, que debido a las características especiales de comportamiento del menor recomiendan mantener referencias estables para atender distintas situaciones.

Se trata de menores con alto grado de dependencia, cuyo proyecto socioeducativo pasa por estar inscritos en contextos educativos normalizados y que, por tanto, requieren un incremento en su supervisión, garantizando una atención continua (cambios posturales; apoyo en desplazamientos y supervisión).

- Menores con cuadros médicos complejos que, de manera frecuente, ingresan en centros hospitalarios, siendo preciso garantizar (a petición de los propios hospitales) el acompañamiento continuo de un adulto que atienda sus necesidades y demandas.





## Comunidad de Madrid

- Menores que reciben tratamientos individualizados, de carácter ambulatorio, desde distintos dispositivos del entorno comunitario (terapias, consultas médicas, rehabilitación, logopedias, etc.), siendo necesario que, a nivel organizativo, se facilite la disponibilidad de apoyos que hagan posible estos acompañamientos, manteniendo la dinámica residencial. Hemos de tener en cuenta que las Residencias, generalmente, se organizan en unidades de convivencia o grupos que cuentan entre 8 y 12 menores con un solo educador de referencia.
- Menores, en tramos iniciales de edad, o con especiales necesidades, sobre los que intencionadamente se mantiene una elección individualizada en su escolarización, así como en otras actividades extraescolares, abarcando un abanico amplio de recursos formativos y de ocio de la zona. En este sentido, la dificultad vendría dada en que el acompañamiento a estos recursos (la mayoría de ellos distanciados unos de otros), ha de realizarse a la misma hora con un número elevado de menores.

**Estos servicios son de carácter puntual y serán necesarios mientras haya menores con estas características residiendo en las residencias infantiles públicas y no en otras específicas**, ya que se trata de buscar la **máxima integración** en los casos en los que sea posible, **en contextos normalizados**, siendo las Residencias infantiles Públicas las que pueden hacer este trabajo de normalización de la vida de estos menores.

Para poder llevar a cabo esta labor, la Red de Residencias Públicas no dispone en este momento de profesionales suficientes, ya que en sus plantillas, se cuenta con un número muy reducido de Técnicos Auxiliares Educativos, que sería la categoría profesional más adecuada para asumir dichas funciones, pero que no alcanzan para poder realizar todas estas tareas **de manera personalizada, en momentos muy puntuales y en horarios muy determinados**.

Por ello, ante la necesidad de atender a estos perfiles menores en todas las Residencias de la Red de Protección en los últimos años, este servicio se ha venido prestando a través de la contratación externa de servicios, ajustándose en cada contrato el número de horas y horarios, en función de las necesidades que el servicio de acompañamiento y apoyo auxiliar requería, pero al tratarse de una necesidad continuada en el tiempo, aunque no homogénea en carga de trabajo durante todo el año, e ineludiblemente necesaria, tanto por la complejidad del perfil de los menores a los que se dirigen estos servicios como por la intensidad requerida en su prestación, **se considera que su inclusión en un único contrato de servicios proporcionará una mayor calidad de la intervención, una mejor coordinación de los profesionales intervinientes y la necesaria continuidad de la prestación del servicio**.

No se incluyen, por tanto, en el objeto del presente contrato, las prestaciones de carácter más educativo y relacionado con la organización de la vida cotidiana, que son propias de los educadores del centro.

Por todo ello, para garantizar la atención a las necesidades básicas de estos menores, así como su bienestar social y los procesos adecuados de integración activa, es preciso contar con un servicio de acompañamiento y apoyo auxiliar. Provisionalmente, los servicios se están cubriendo mediante contratación menor, pero, una vez vigente la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y teniendo en cuenta las limitaciones previstas, la figura del





contrato menor ya no es el instrumento adecuado para la cobertura de este tipo de servicios a desarrollar continuadamente a lo largo del tiempo.

Su no prestación podría provocar un grave trastorno al interés público, representado en los menores a los que se dejaría sin la atención necesaria para cubrir sus necesidades básicas, incumpliendo la legislación en materia de protección de la infancia, entre ellas, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la versión vigente, dada por las Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia, la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, la Constitución y los convenios internacionales en esta materia.

Además, para dar respuesta a esta necesidad, la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha emitido **la Orden 681/2019, de 9 mayo, por la que se desarrolla la distribución de competencias para la prestación de los servicios de atención auxiliar y mediación intercultural y traducción en los centros de menores adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social**, en la que atribuye a la Dirección General de la Familia y el Menor la prestación del servicio de acompañamiento y apoyo auxiliar en las residencias públicas de protección dependientes de dicha agencia, lo cual justifica la tramitación de este contrato.

### **B) SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL.**

Según se recoge en la Ley 26/2015, de 28 de julio, *de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia*, en su artículo primero, que modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 10, apartado 3, *“las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional (...), garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.*

*Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.*

La población de menores extranjeros no acompañados que llegan a la Comunidad de Madrid, ingresan, en un primer momento, en los Centros de Primera Acogida “Hortaleza” o “Isabel Clara Eugenia”. Una vez que se ha determinado, por parte de la Fiscalía de Menores, la edad de los menores, y se ha estudiado su situación personal y socio-familiar, son derivados a un recurso especializado en el que se elabora su proyecto socio-educativo individual. Este recurso es el CACYS Manzanares, centro de titularidad pública, el cual se encuadra dentro de los recursos de adolescentes de la red de Centros de Protección y que tiene como principal finalidad de su Proyecto, lograr la adaptación cultural y social de los menores extranjeros no acompañados. De ahí, que este Servicio de mediación intercultural esté destinado a estos tres centros de protección.





## Comunidad de Madrid

Estos menores presentan, en su gran mayoría, un perfil complejo, entre cuyas características destacaríamos las siguientes: impulsividad, dificultades de autocontrol, escasa tolerancia a la frustración, endurecimiento emocional, falta de asertividad, consumos asociados de sustancias tóxicas, conocimientos y/o aprendizajes no adaptados a los planes formativos de nuestro país, escaso o nulo conocimiento del castellano, etc.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, es preciso favorecer la adaptación inicial de estos menores a nuestro contexto sociocultural, proporcionándoles los conocimientos, destrezas y habilidades suficientes para incorporarse, con unas mínimas garantías de éxito, a los distintos recursos formativos, prelaborales, culturales y de ocio existentes.

Desde esta perspectiva, resulta fundamental contar con la figura del mediador intercultural (categoría laboral no contemplada en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de la Madrid), a fin de favorecer los procesos de comunicación entre menores y profesionales, así como entre dichos profesionales y su familia de origen; transmitir, de forma precisa, las indicaciones de sus educadores, así como las normas de convivencia, y de organización y funcionamiento del centro; adquirir aprendizajes instrumentales básicos para poder desenvolverse socialmente; conocer la cultura y valores de nuestra sociedad; etc.

Asimismo, para dar respuesta a esta necesidad, la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha emitido la *Orden 681/2019, de 9 mayo, por la que se desarrolla la distribución de competencias para la prestación de los servicios de atención auxiliar y mediación intercultural y traducción en los centros de menores adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social*, en la que atribuye a la Dirección General de la Familia y el Menor la prestación del servicio de mediación intercultural y traducción para menores extranjeros en los centros dependientes de dicha Agencia, a fin de facilitar su proceso de integración educativa, social, cultural y laboral en la sociedad española.

Por todo ello, al no disponer de los medios personales necesarios y suficientes para la prestación directa de estos servicios y al haberse atribuido a la Dirección General de la Familia y el Menor la competencia sobre estos servicios, se ha considerado la contratación **para el ejercicio 2020-2021** de estas prestaciones en los centros públicos de protección de menores de gestión directa, a través de un contrato de servicios por procedimiento abierto mediante dos lotes bajo la denominación de **“ACOMPañAMIENTO, APOYO AUXILIAR Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DE MENORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID”**.

En Madrid, a a la fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Fdo: Alberto San Juan Llorente

